

C. SOLICITANTE

PRESENTE:

Con fundamento en lo establecido por los numerales 1º, 5º punto 1 fracción VII, 6º punto 1, 24 punto 1 fracción II, 25 punto 1 fracciones VII, 32 punto 1 fracción III, 77 punto 1 fracción II, 84 punto 1 y 85 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en los artículos 84, 85, 86 punto 1 fracción II y 90 punto 1 fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, el suscrito **LICENCIADO EMILIANO BRISEÑO CASTELLANOS**, en mi carácter de Director de la Unidad de Transparencia de la Coordinación General Estratégica de Seguridad, en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo dictado **el día 31 treinta y uno de Octubre del año 2024 dos mil veinticuatro**, que le fuese notificado a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, mediante oficio **CGES/UT/7640/2024**, donde se desprende que esta Unidad de Transparencia de la Coordinación General Estratégica de Seguridad **estimó necesario acogerse a la hipótesis normativa contenida en el numeral 90 fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios**, se procede a emitir el presente **Informe Específico** que da respuesta a su solicitud de acceso a la información, en la que se solicita literalmente lo siguiente:

“Que autoridad asigna los vehículos blindados, así como la cantidad de escoltas a: El Gobernador, Fiscal, Fiscal Regional, Coordinador de Seguridad Pública y Secretario de Seguridad. así mismo, desde el año 2018, que cantidad de vehículos blindados y escoltas, se han venido asignando a cada una de las autoridades en cita. “(sic)

En ese tenor, se indica que una vez recibida y analizada la solicitud de información pública de referencia, esta Unidad de Transparencia tuvo a bien ordenar su búsqueda interna, en términos de lo dispuesto por los artículos 5º punto 1 fracción VII, 25 punto 1 fracción VII, 31 punto 1 fracción I, 32 punto 1 fracciones III y VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procedió a realizar la búsqueda de la información solicitada, en las áreas que conforme a sus obligaciones y atribuciones se estimó eran competentes o que pudiesen tenerla, primeramente a efecto de determinar la competencia de esta Coordinación General Estratégica de Seguridad, cerciorarnos de su existencia y en su oportunidad resolver de su procedencia o improcedencia para proporcionarla, conforme a lo establecido en la ley aplicable a la materia, por lo que al reunir los requisitos de ley y actualizarse la hipótesis establecida en los artículos 79, 82 punto 1 y 83 puntos 1 y 2 de la misma Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, esta Unidad de Transparencia tuvo a bien registrarla internamente en el índice de este sujeto obligado, integrando y desahogando el procedimiento administrativo correspondiente, por lo que una vez realizada la búsqueda de la información requerida; misma que remitió a esta Unidad de Transparencia la respuesta correspondiente, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 84 punto 1, 85 y 86 punto 1 fracción II y 87 punto 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, se estima resolver su solicitud de información en sentido **Afirmativa Parcial**, por tratarse de

información Reservada, mientras que otra Ordinaria, de conformidad a lo actuado en el procedimiento de acceso a la información que fuera identificado y resuelto bajo el número de expediente interno **LTAIPJ/CGES/2295/2024**, en el cual se petitionó información idéntica a la aquí solicitada, por lo cual se procede a dar respuesta con las documentales del citado procedimiento de acceso a la información, lo anterior con fundamento en lo establecido en el artículo 5º punto 1 fracción XIV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, y que se precisa a la postre:

En primer término resulta oportuno realizar la aclaración al Ciudadano que a esta Unidad de Transparencia de la Coordinación General Estratégica de Seguridad corresponde realizar un pronunciamiento respecto de aquella información con que pudiera contar bajo su resguardo el sujeto obligado Secretaría de Seguridad, atendiendo a lo estipulado en el numeral 31 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco en correlación con el numeral 13 fracción I incisos a) y b) del Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Administración Pública Centralizada del Estado de Jalisco, que estatuye que corresponde a esta Unidad de Transparencia el desahogo de los asuntos de la Coordinación General Estratégica de Seguridad así como de la Secretaría de Seguridad, por lo que se reitera al solicitante que únicamente se dará respuesta por lo que corresponde a información que pudiera poseer este sujeto obligado, resultando aplicable lo establecido en el numeral 25 fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus municipios que estipula que es obligación de los sujetos obligados el recibir las solicitudes de información pública dirigidas a él, por lo que se reitera que esta Unidad de Transparencia realizará un pronunciamiento en lo que respecta a información con que pudiera poseer el sujeto obligado Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco., **teniendo en cuenta que la Secretaría de Seguridad es un sujeto obligado de reciente creación**, atento a lo establecido en el decreto número **27213/LXII/18** mediante el cual se abrogó la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y se creó la actual Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco;; así como el decreto número **27214/LXII/18**; en donde se abrogó la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, y se expidió la Ley Orgánica de la Fiscalía del Estado de Jalisco; ambos ordenamientos del Estado de Jalisco, expedidos por el Congreso del Estado, mismas que se publicaron en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” el día miércoles 5 cinco de Diciembre del año 2018 dos mil dieciocho; teniendo vigencia los mismos a partir del día **06 seis de Diciembre del año 2018 dos mil dieciocho**; temporalidad a tener en consideración para efectos de la respuesta que pudiera proporcionar este sujeto obligado.

En ese sentido, es necesario tener en consideración que la Secretaría de Seguridad es un sujeto obligado que dirige su esfuerzo a mantener o restaurar el orden y la paz pública, así como garantizar la seguridad e integridad de los habitantes del Estado de Jalisco, la Reinserción Social y la Seguridad Vial, la cual encuentra su existencia jurídica acorde a lo establecido en el numeral 16 fracción XV y 31 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, en los que se determinan respectivamente, la existencia legal de la Secretaría de Seguridad así como las atribuciones que le corresponden, mismas que son desarrollar y aplicar las políticas de seguridad pública en el Estado; diseñar, aplicar, y evaluar, la política criminal en el Estado, tomando en consideración factores inmateriales como las condiciones sociales, económicas, y culturales de la población de la Entidad; **organizar, dirigir, administrar y supervisar la policía estatal, incluyendo la policía vial**, en los términos del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco y de las demás disposiciones aplicables.

Respecto al cuestionamiento consistente en "Que autoridad asigna los vehículos blindados, así como la cantidad de escoltas a: El Gobernador, Fiscal, Fiscal Regional, Coordinador de

Seguridad Pública y Secretario de Seguridad..." (sic), primeramente, se aclara que el término "escolta" utilizado por el solicitante no se encuentra contemplado en la Ley del Servicio de Protección para el Estado de Jalisco y sus Municipios, ni en su Reglamento, sin embargo con base en el principio de máxima publicidad, se infiere que el solicitante estaría haciendo referencia a personal de protección, es decir a los elementos operativos que se despliegan en los servicios otorgados con base en las disposiciones contenidas en esos ordenamientos legales. Una vez, realizada esa aclaración, se responde que única y exclusivamente en aquellos casos en que la asignación de vehículos oficiales y personal de protección (mencionado por el solicitante erróneamente como "escoltas") obedece al contenido de un Dictamen Técnico, el Área correspondiente para autorizar la asignación de vehículos oficiales, es la Coordinación del Servicio de Protección Estatal de la Secretaría de Seguridad del Estado, acorde a lo establecido en el artículo 8 de la Ley del Servicio de Protección para el Estado de Jalisco y sus Municipios, 4, 35, y demás relativos y aplicables de su Reglamento.

Una vez lo anterior y atendiendo la preclasificación sugerida por la Coordinación del Servicio de Protección Estatal, la Dirección General de Administración, ambas dependientes de la Secretaría de Seguridad, así como la Coordinación General Estratégica de Seguridad, el Comité de Transparencia de la Coordinación General Estratégica de Seguridad determinó en la Octogésima Segunda Sesión Extraordinaria de fecha 06 seis de Noviembre del año 2024 dos mil veinticuatro, de la imposibilidad jurídica de proporcionar la información con que se pudiera contar, acorde a la información documental que pudiera poseer o generar de conformidad a sus atribuciones de las áreas ya señaladas; respecto de lo siguiente: "que cantidad de vehículos blindados y escoltas, se han venido asignando a cada una de las autoridades en cita." (sic). Por lo anteriormente expuesto, queda de manifiesto que NO ha lugar de ministrar la información solicitada, por considerarse información con el carácter de RESERVADA; dicha clasificación obedece a lo establecido en los artículos 1º, 2º, 3º, 17.1 fracción I, inciso a), c) y f), 18, 19, 20 punto 1 y 2, 21.1 fracción I, 22, 23, 25 punto 1 fracciones X y XV, 26, punto 1 fracción V, 27, 28 y 30, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; 11 y 12 de su Reglamento; 8, 9, 10 y 20 del Reglamento Marco de Información Pública; 1 puntos 1 y 2, 2 punto 1 fracción III, 3 punto 1 fracciones IX y X, 5 punto 1, 30, 38 y 45 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios; 1, 2, 40 fracciones I, II y XXI, 110, 122 y 123 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 1, 2, 62, 106 fracción XVIII, 150 fracción I, 151, 157 y 158, de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco; 24, 25, 28, 34, 35, 40 Bis 3, 40 Bis 9 y 40 Bis 14 del Código Civil para el Estado de Jalisco; Lineamiento Cuarto, Quinto, Séptimo, Octavo, Décimo Séptimo fracción VII y VIII, Décimo Octavo, Vigésimo Sexto, Trigésimo Cuarto; demás relativos y aplicables de los Lineamientos Generales de clasificación y desclasificación de la información así como para la elaboración de versiones públicas debidamente publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el día 18 dieciocho de Noviembre del año 2022 dos mil veintidós; vigentes a partir del día 17 diecisiete de Enero del año 2023 dos mil veintitrés.

De la misma forma atendiendo lo siguiente:

Respecto al fragmento de la petición consistente en *"Conforme a los cargos de altos funcionarios, como: Gobernador...Fiscal...Fiscal Regional...Secretario de Seguridad Pública...Coordinador de Seguridad Pública...¿cuántos escoltas y vehículos blindados tienen a su disposición?" (sic)*, se responde que la información derivada de los servicios que despliega la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, así como la contenida en los Dictámenes Técnicos que emite en uso de su facultades legales, que incluye aspectos como modalidad del servicio, equipamiento, vehículos y elementos operativos que se destinaran a un determinado servicio, tienen el carácter de reservados, de acuerdo a lo establecido en la fracción I, del artículo 3 del Reglamento de la Ley del Servicio de Protección para el Estado de Jalisco y sus

Municipios, que señala que todos los aspectos de la protección y la información de los sujetos protegidos deberán tratarse con la mayor confidencialidad, y que quienes participen en la protección y las acciones derivadas de esos servicios, deberán actuar con la debida reserva y confidencialidad, y en ese mismo sentido, el artículo 45 de ese mismo ordenamiento legal, dispone que a la información contenida en los expedientes bajo resguardo de este sujeto obligado, se le dará trato de confidencial y reservada, por lo que, desde este momento se solicita **SE CLASIFIQUE COMO RESERVADA**, en virtud que este sujeto obligado, se encuentra legal y jurídicamente imposibilitada para proporcionarla, tomando en consideración que el hacerlo implicaría la violación presente y directa a los ordenamientos legales antes señalados y a las disposiciones legales que regulan el acceso, manejo, distribución, publicación y difusión de ese tipo de información, como lo son La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los Lineamientos Generales de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco, tomando en consideración que el solicitante pretende saber la cantidad de vehículos y "escoltas" que se han venido asignando al Gobernador, al Fiscal, al Fiscal Regional, al Coordinador de Seguridad Pública y al Secretario de Seguridad, existiendo imposibilidad legal y jurídica para revelar esos datos, porque ello infringiría el principio de reserva y confidencialidad, instituido en la Ley del Servicio de Protección para el Estado de Jalisco y sus Municipios, y su Reglamento, que fundamentalmente radica en que toda la información, sea cualitativa o cuantitativa que derive de la aplicación de esos ordenamientos legales, tiene carácter de confidencial y reservada, e implicaría poner en grave riesgo la eficacia y éxito de los servicios que la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, despliega en cumplimiento a sus facultades y obligaciones legales, no debiendo pasar inadvertido el hecho de que esa la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, que es una Dependencia del Gobierno del Estado de Jalisco, encargada entre muchas otras obligaciones, de mantener la seguridad pública en esta Entidad Federativa, y por esa razón revelarla atentaría contra las estrategias que en materia de seguridad pública se encuentran encomendadas a esa Institución, aunado a que la información solicitada es inherentes a funcionarios públicos que por la naturaleza de sus atribuciones y obligaciones legales, se encuentran ligados a la seguridad pública y a la procuración de justicia en el Estado de Jalisco, y por tal razón, resulta indispensable resguardar su seguridad, integridad y vida, en aras de garantizar que puedan desarrollar sus funciones al estar destinadas a la conservación del orden y la tranquilidad en esta Entidad Federativa.

En el contexto antes referido, revelar la información consistente en *"que cantidad de vehículos blindados y escoltas, se han venido asignando a cada una de las autoridades en cita."* (sic), conllevaría un riesgo real, demostrable e identificable, en perjuicio de Derechos instituidos a favor de terceros (en este caso quienes el solicitante identifica como Gobernador, Fiscal, Fiscal Regional, Coordinador de Seguridad Pública y Secretario de Seguridad), y vulneraría también la seguridad pública en esta Entidad Federativa, al referirse a aspectos que deben mantenerse en sigilo para garantizar el éxito en las estrategias de seguridad implementadas por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Jalisco, debiendo privilegiarse estas, porque se encuentran vinculadas directamente a las actividades que tiene encomendadas la Secretaría en comento y por ende a la gobernabilidad del Estado, y a la conservación de la paz y seguridad pública, que tienen como destinataria a la población jalisciense, aspectos estos, que deben privilegiarse sobre el derecho de acceso a la información, ya que en este caso cobran mayor relevancia por su magnitud, el derecho a la vida y a la seguridad de personas, como lo son, los citados funcionarios públicos que pudieran encontrarse vinculados a las disposiciones e hipótesis legales establecidas tanto en la Ley del Servicio de Protección para el Estado de Jalisco y sus Municipios, y su Reglamento, cuya interpretación y aplicación corresponde principalmente a la referida Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco.

La limitación del derecho de acceso a la información resulta proporcional, pues representa el medio menos restrictivo disponible para evitar un probable perjuicio a garantías constitucionalmente protegidas. En tal virtud, el riesgo que implicaría la revelación de la información, superaría el interés que tiene el solicitante de información de conocer esos datos, toda vez que los bienes jurídicos protegidos con la solicitud de reserva planteada en este documento, de acuerdo a lo previsto en las fracciones I, V y VII, del artículo 113, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en el artículo 17, apartado 1, fracción I, incisos a), c) y f), son la vida y seguridad de las personas, aunado a que revelar la información, implicaría transgredir disposiciones de orden público como lo son la Ley del Servicio de Protección para el Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, que establecen que la información derivada del funcionamiento y operación de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, tiene el carácter de reservada y confidencial; **en ese orden de ideas, cabe mencionar que** el artículo 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en concordancia con el artículo 17, apartado 1, fracción I, inciso c), de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, establecen que podrá clasificarse como reservada aquella información cuya publicación pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física, lo cual acontecería en caso de que se revelaran los datos que pretende obtener el solicitante, porque implicaría hacer pública información, que evidentemente colocaría en una situación de grave riesgo a los funcionarios públicos sobre los que solicita información, al constituir información que contiene aspectos concretos en materia de seguridad, cuya divulgación se encuentra prohibida por disposición expresa del Reglamento de la Ley del Servicio de Protección para el Estado de Jalisco y sus Municipios, que establece que todos los aspectos de los servicios brindados por la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, con base en esos ordenamientos legales, tienen carácter de reservados y confidenciales.

Por su parte, el lineamiento Décimo Octavo de los Lineamientos Generales de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas (en lo sucesivo, los Lineamientos Generales) establece lo siguiente:

"Décimo octavo. De conformidad con el artículo 113, fracción I de la Ley General, podrá considerarse como información reservada, aquella comprometa la seguridad pública, al poner en peligro las funciones a cargo de la Federación, la Ciudad de México, los Estados y los Municipios, tendientes a preservar y resguardar la vida, la salud, la integridad y el ejercicio de los derechos de las personas, así como para el mantenimiento del orden público...

Asimismo, podrá considerarse como reservada aquella que revele datos que pudieran ser aprovechados para conocer la capacidad de reacción de las instituciones encargadas de la seguridad pública, sus planes, estrategias, tecnologías, información, sistemas de comunicaciones." (sic).

De donde se desprende que podrá considerarse como información reservada, aquella que comprometa la seguridad pública, al poner en peligro las funciones a cargo de los Estados, tendientes a preservar y resguardar la vida, la salud, la integridad y el ejercicio de los derechos de las personas, así como para el mantenimiento del orden público, y en el caso que nos ocupa, es evidente que se reúnen todos esos requisitos y condiciones que hacen posible clasificar como reservada la información requerida por el solicitante, porque el hacerla pública indudablemente pondría en peligro la seguridad de personas, en este caso concreto, la de los funcionarios públicos que de manera específica menciona el solicitante, tomando en consideración que revelar la cantidad de vehículos y "escortas" que se les han venido asignando, pondría en grave riesgo su seguridad, integridad y vida, porque de caer en manos

de personas ligadas a la delincuencia, les representaría una herramienta valiosa para fraguar o maquinan planes delictivos, en contra de uno de esos funcionarios, aunado a que el Reglamento de la Ley del Servicio de Protección para el Estado de Jalisco y sus Municipios, atribuye a toda la información que se encuentre en poder de este sujeto obligado, el carácter de reservada, lo cual es entendible y perfectamente aplicable, porque los servicios que despliega la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco en uso de sus atribuciones legales, requieren el máximo sigilo para tener éxito, al tener como fin la preservación de la seguridad, integridad y vida de personas, por lo que revelarla generaría el grave riesgo de que se viera afectado el orden público, tomando en cuenta que la información solicitada forma parte de aspectos sensibles de las estrategias operativas, que despliega la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, que es una de las dependencias encargadas de mantener el orden y la tranquilidad en esa Entidad Federativa. En ese contexto, revelar dicha información, también pudiera ser aprovechado para conocer la capacidad de reacción de una institución de seguridad pública, sus planes, estrategias e información, en razón de que la cantidad de vehículos y personal asignados a cualquier servicio, incluso en forma numérica o cuantitativa, es parte de la información, planes y estrategias con las que la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, despliega sus servicios y actividades, cuyo éxito y eficacia se verían gravemente afectados con la divulgación de la información.

El citado lineamiento guarda concordancia con el Vigésimo Tercero, de esos mismos Lineamientos Generales, que al respecto dispone:

"Vigésimo tercero. Para clasificar la información como reservada, de conformidad con el artículo 113, fracción V de la Ley General, será necesario acreditar un vínculo, entre una o varias personas físicas y la información que pueda poner en riesgo su vida, seguridad o salud; especificando cual de estos bienes jurídicos será afectado, así como el potencial daño o riesgo que causaría su difusión."

Como es posible observar, el lineamiento en cita exige a efecto de que una información pueda ser clasificada como reservada, lo siguiente:

1. Acreditar un vínculo entre una o varias personas físicas y la información que pueda poner en riesgo su vida, seguridad o salud.
2. Especificar el bien jurídico que será afectado.
3. Especificar el potencial daño o riesgo que causaría su difusión.

Con relación al primer punto, revelar la información solicitada, implicaría poner en riesgo la seguridad, integridad física e incluso la vida de personas, en este caso, la de los funcionarios públicos sobre los cuales se pide información, datos estos que evidentemente, de hacerse públicos podrían llegar a manos de personas que en un momento dado, podrían contar con datos valiosos para diseñar planes delictivos o agresiones en su contra, a través de comparativos o confrontas con otros datos o información. En ese sentido, está acreditada la existencia de un vínculo entre la información solicitada y el perjuicio que podría causar su revelación a los funcionarios sobre los cuales se requirió.

En cuanto al segundo punto, se estima que los bienes jurídicos tutelados a través de la clasificación de reserva, son la vida, seguridad y salud de los funcionarios públicos antes señalados, toda vez que dar a conocer la información solicitada, implicaría revelar datos que a la postre, podrían ser utilizados para causar un daño o menoscabo a sus derechos y garantías, que gozan de protección de carácter incluso constitucional.

Respecto del potencial daño o riesgo que causaría la difusión de información solicitada, además de comprometer el desarrollo de estrategias que forman parte de la seguridad

pública, y los servicios que otorga la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, implicaría poner en peligro la seguridad, salud y vida de personas, en concreto la de los funcionarios públicos que menciona el solicitante, ya que se estaría revelando información que permitiría hacer comparativos con otros datos, para la maquinación de posibles planes delictivos de una manera más precisa, sin que sea obstáculo para considerar lo anterior, el hecho de que el solicitante requiera la información en cantidad numérica, dado que la normativa que regula las funciones de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, entre la que se encuentra el Reglamento de la Ley del Servicio de Protección para el Estado de Jalisco y sus Municipios, dispone que toda la información derivada de la aplicación de ese Reglamento y la Ley del Servicio de Protección para el Estado de Jalisco y sus Municipios, tiene el carácter de reservada y confidencial.

Con base a lo anterior, puede establecerse lo siguiente:

I. De acuerdo con lo anterior, la revelación de la información requerida por el solicitante, representa un riesgo real, demostrable e identificable, dado que podría incidir negativamente en la estrategia que se implementa para la seguridad de las personas en la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, en razón de que ésta Dependencia encargada de mantener el orden y la seguridad pública en esta Entidad Federativa, asimismo se pondría en riesgo la vida, seguridad e integridad de personas o individuos, concretamente las de los funcionarios públicos que refiere el solicitante, ya que la información solicitada, de hacerse pública podría ser utilizada por personas o grupos con intenciones delictivas que tuvieran la intención de atacar en contra de la vida y/o seguridad y/o integridad física de esas personas y/o individuos.

II. El riesgo de perjuicio que supone la divulgación de la información solicitada, supera el interés general de que se difunda, pues podría reflejar aspectos, detalles y acciones relativas a estrategias que tienen como fin la seguridad pública; asimismo los derechos que se tutelan al reservarlo son superiores, al tratarse de la vida, la seguridad y la salud de personas físicas.

III. Por lo anterior, la reserva es proporcional y resulta el medio menos restrictivo posible para evitar el perjuicio al interés público, pues se clasifica la información y datos que obran en este sujeto obligado, con base al principio de reserva y confidencialidad, establecido en la fracción I, del artículo 3, del Reglamento de la Ley del Servicio de Protección para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Con base a lo anterior, este sujeto obligado estima que se actualizan las causales de reserva previstas en las fracciones I, V y VII del artículo 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, puesto que la divulgación de la información solicitada razonablemente representa un riesgo real, demostrable e identificable en perjuicio al interés público, tomando en consideración que las causales de reserva previstas en esas fracciones resultan ser las siguientes:

"Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:

I. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable;...

V. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física;...

VII. Obstruya la prevención o persecución de los delitos..."

Dichas causales de reserva tienen el propósito de tutelar determinados bienes jurídicos frente a la divulgación de información que, por sí misma, podría poner en riesgo la seguridad e, inclusive la vida de personas físicas, o la seguridad pública, ya sea porque se trate de información que pudiera ser de utilidad para grupos delictivos que actuaran en contra de

determinadas personas, o bien, se revelaran aspectos o circunstancias específicas que potencializaran el nivel de riesgo de que acontezcan situaciones que obstaculicen o impidan el éxito de las estrategias operativas adoptadas por la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco; de igual manera se obstruiría la prevención de delitos, porque la información solicitada podría llegar a manos de personas que pudieran cometer conductas delictivas en agravio de los funcionarios públicos señalados de manera específica en la solicitud de información. En ese orden de ideas, el dar a conocer la información, comprometería la eficacia de las acciones que dicha Secretaría realiza en cumplimiento a las disposiciones legales que regulan su actuar.

Conforme a lo anterior, específicamente sobre el supuesto de seguridad pública como límite al derecho de acceso a la información a que hace referencia la fracción I, del artículo 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se estima que la difusión de elementos que pudieran revelar, aislada o conjuntamente con otros datos, una parte de la estrategia que se implementa para el cumplimiento de las diversas atribuciones, facultades y obligaciones legales impuestas a este sujeto obligado, podría afectar la seguridad pública del Estado de Jalisco, pues se comprometerían las acciones que realiza la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco.

Ahora, por cuanto a la hipótesis señalada en la fracción V del artículo 113, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se considera que la difusión de la información consistente en *"que cantidad de vehículos blindados y escoltas, se han venido asignando a cada una de las autoridades en cita."* (sic), puede poner en riesgo la seguridad, salud o la vida de personas físicas, en este caso las de los funcionarios públicos sobre los cuales se requirió la información, toda vez que implicaría la divulgación de información que a la postre podría ser utilizada por grupos delictivos para la planeación de estrategias y ejecución de actos ilícitos en contra de esas personas. Además, que el riesgo de perjuicio que supondría la divulgación de tal información supera el interés público de su publicidad, toda vez que los bienes jurídicos que protege la causal de reserva citada, son la seguridad, la salud y la vida de personas, por tal motivo, debe privilegiarse la protección de esos bienes jurídicos sobre el derecho de acceso a la información.

Respecto a la hipótesis descrita en la fracción VII, de la referida Ley General, la divulgación de la información posibilitaría, la elaboración de planes delictivos, ya que el solicitante pretende saber la cantidad de vehículos y "escoltas" que se han venido asignado al Gobernador del Estado de Jalisco, Fiscal, Fiscal Regional, Coordinador de Seguridad Pública y Secretario de Seguridad, datos estos que son sumamente sensibles, porque forman parte de los planes y estrategias que en materia de seguridad se implementan, para el mantenimiento del orden público, y para garantizar la seguridad del Titular del Poder Ejecutivo de esta Entidad Federativa, aunado a que, confrontada y comparada con otros datos, permitiría a través de deducciones, obtener otros datos que a la postre podrían ser utilizados por personas que pudieran tener la intención de realizar conductas delictivas en su contra.

En consecuencia, la información solicitada TIENE EL CARÁCTER DE RESERVADA, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas; y con el fin de dar un sustento mayor a esa afirmación, se señalan los fundamentos legales y los razonamientos lógico-jurídicos en los que este sujeto obligado sustenta esa postura institucional; concretamente este caso particular, en el cuestionamiento ya indicado, se ajusta a los supuestos de reserva, previstos en la normativa Federal y Estatal en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que resultan

aplicables a este asunto. En ese contexto, el artículo 3, fracción II, inciso b) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco, señala:

"...Artículo 3.º Ley - Conceptos Fundamentales..

II. Información pública protegida, cuyo acceso es restringido y se divide en:...

b) Información pública reservada, que es la información pública protegida, relativa a la función pública, que por disposición legal temporalmente queda prohibido su manejo, distribución, publicación y difusión generales, con excepción de las autoridades competentes que, de conformidad con la ley, tengan acceso a ella..."

De donde se desprende que existe información pública que puede ser clasificada como reservada y qué, en ese supuesto, su manejo, distribución, publicación y difusión se encuentran prohibidas por esa Ley Estatal, bajo los supuestos y condiciones que ese ordenamiento legal establece.

Bajo el anterior contexto, es evidente que los datos e información solicitados por el interesado, en el sentido de "que *cantidad de vehículos blindados y escoltas, se han venido asignando a cada una de las autoridades en cita.*" (sic), constituyen información protegida cuya distribución, publicación o difusión se encuentra restringida y prohibida por disposición expresa de la normativa aplicable, en razón de que los servicios que otorga la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, se encuentran regulados por las disposiciones contenidas en la Ley del Servicio de Protección para el Estado de Jalisco y sus Municipios, y su Reglamento, ordenamiento este último, que establece que el Servicio de Protección se fundamenta entre otros, en el principio de Reserva y Confidencialidad, descrito por dicho ordenamiento en la siguiente forma:

"Artículo 3. El Servicio de Protección, se fundamenta especialmente en los siguientes principios:

I. Reserva o Confidencialidad

Todos los aspectos de la protección y la información de los sujetos protegidos se tratarán con la mayor confidencialidad conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Los servidores públicos o elementos operativos de las instituciones policiales y todo otro organismo o individuo que deba participar en la protección y las acciones correspondientes, deberán actuar con la debida reserva y confidencialidad..."

De donde se desprende que **todos los aspectos de la protección se tratarán con la mayor confidencialidad**, y que los servidores públicos o elementos operativos de las instituciones policiales y todo otro organismo o individuo que deba participar en esa protección y las acciones correspondientes, deberán actuar con la debida reserva y confidencialidad, sin que se haga distinción entre información que pudiera tener carácter cuantitativo o cualitativo, y por esa razón resulta inviable desde un punto de vista jurídico, conceder al solicitante la información que solicita, porque el hacerlo implicaría una violación directa al citado principio de reserva, instaurado en el dispositivo legal que se transcribió.

Bajo todo el anterior contexto, con sustento en la lectura de esas disposiciones legales, puede establecerse que toda la información resguardada en los archivos físicos y/o electrónicos de este sujeto obligado, y en los expedientes que se forman con motivo de un servicio de protección otorgado en los términos de la Ley del Servicio de Protección para el Estado de Jalisco y sus Municipios, y su Reglamento, sea cuantitativa o cualitativa, tiene el carácter de confidencial y reservada, sin limitación o excepción en contrario, lo cual deriva de la propia naturaleza que tiene ese tipo de servicios, que están encaminados primordialmente a salvaguardar la seguridad, integridad y vida de personas.

Con base en lo anterior, se reitera la solicitud realizada en el sentido de que la información descrita por el solicitante en el sentido de "*que cantidad de vehículos blindados y escoltas, se han venido asignando a cada una de las autoridades en cita.*" (sic), **se clasifique como RESERVADA**, por ser esta la clasificación que otorgan las anteriores disposiciones legales a ese tipo de datos, y que como una medida de control excepcional, por razones de seguridad, se mantenga en el lugar en el que se encuentra actualmente, para impedir que personas no autorizadas puedan acceder a la misma, en razón de que de revelarse, se violaría el contenido de disposiciones de orden público como lo son, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, la Ley del Servicio de Protección para el Estado de Jalisco y sus Municipios, su Reglamento y los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia.

En ese orden de ideas y con fundamento en las disposiciones legales anteriormente citadas, que rigen de manera específica el trato que deberá darse a la información que se encuentra resguardada por este sujeto obligado, con motivo de los servicios de protección que otorga con base en la Ley del Servicio de Protección para el Estado de Jalisco y sus Municipios, y su Reglamento, **puede establecerse fundadamente que cualquier dato que derive de ese tipo de servicios, tiene el carácter de reservado y confidencial porque su divulgación podría poner en peligro la operatividad y eficacia de ese tipo de actividades, que están destinadas a proteger directamente la vida de personas que se encuentran en circunstancias especiales de riesgo**, siendo determinante y necesario implementar mecanismos jurídicos y legales que impidan el debilitamiento de ese tipo de esquemas de protección o la capacidad de respuesta de los elementos operativos asignados a esas labores.

Aunado a lo anterior, la improcedencia para entregar la información señalada, deriva del hecho de que una vez proporcionada, **no se podría tener control del manejo que se le daría**, existiendo la probabilidad de que pudiera llegar a manos de personas que se dediquen a delinquir o que tengan interés en atentar en contra de la persona mencionada en la solicitud de información, lo que pondría en riesgo la seguridad, integridad física e incluso la vida de esa persona, y reduciría de manera significativa o incluso total, su capacidad de respuesta en caso de un ataque o atentado, por lo tanto, esa información no debe ser distribuida, publicada o difundida, porqué se incrementaría el riesgo de que la delincuencia común u organizada incremente su eficiencia en caso de que decidieran atentar en contra de esa persona.

Bajo este enfoque, para la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Jalisco, es más valiosa la vida de las personas, que el derecho fundamental de un ciudadano para conocer información, datos y detalles que puedan en un momento dado poner en riesgo la vida de otras personas o su integridad física, lo anterior sin dejar de considerar también que la integridad física y la vida de los mismos, son bienes jurídicos de mayor relevancia que deben ponderarse y salvaguardarse, en contraposición con la intención del solicitante de información.

Bajo el anterior enfoque, cabe señalar que el derecho de acceder a la información pública, se encuentra limitado y tiene determinadas excepciones, como la que nos ocupa en este caso particular, que está respaldada en el siguiente criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

Página 74, del Tomo XI, correspondiente al mes de abril del 2000, novena época, del Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro:

DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU EJERCICIO SE ENCUENTRA LIMITADO TANTO POR LOS INTERESES NACIONALES Y DE LA SOCIEDAD, COMO POR LOS DERECHOS DE TERCEROS. El derecho a la información consagrado en la última parte del artículo 60. de la Constitución Federal no es absoluto, sino que, como toda garantía, se halla sujeto a limitaciones o excepciones que se sustentan, fundamentalmente, en la protección de la seguridad nacional y en el respeto tanto a los intereses de la sociedad como a los derechos de los gobernados, limitaciones que, incluso, han dado origen a la figura jurídica del secreto de información que se conoce en la doctrina como "reserva de información" o "secreto burocrático". En estas condiciones, al encontrarse obligado el Estado, como sujeto pasivo de la citada garantía, a velar por dichos intereses, con apego a las normas constitucionales y legales, el mencionado derecho no puede ser garantizado indiscriminadamente, sino que el respeto a su ejercicio encuentra excepciones que lo regulan y a su vez lo garantizan, en atención a la materia a que se refiera; así, en cuanto a la seguridad nacional, se tienen normas que, por un lado, restringen el acceso a la información en esta materia, en razón de que su conocimiento público puede generar daños a los intereses nacionales y, por el otro, sancionan la inobservancia de esa reserva; por lo que hace al interés social, se cuenta con normas que tienden a proteger la averiguación de los delitos, la salud y la moral públicas, mientras que por lo que respecta a la protección de la persona existen normas que protegen el derecho a la vida o a la privacidad de los gobernados.

Es por lo que en mérito de lo antes expuesto y del análisis lógico jurídico efectuado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco, se reitera la postura en el sentido de considerar que la información requerida a este sujeto obligado en el sentido de *"que cantidad de vehículos blindados y escoltas, se han venido asignando a cada una de las autoridades en cita."* (sic), tiene el carácter de reservada, al encontrarse contemplada en las hipótesis de reserva establecidas en los ordenamientos legales antes mencionados, aunado a que la divulgación de dicha información atentaría efectivamente contra el interés público protegido por la ley, representando un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo a la seguridad estatal, siendo evidente que el daño o el riesgo de perjuicio que se produciría con la revelación de la información supera el interés público general de conocer la información de referencia; aclarando que la limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio; tales argumentos quedaron plasmados con anterioridad, **y se justifican a través de la prueba de daño**, que se expresa a continuación:

DAÑO PROBABLE.- Se configuraría al dar a conocer la información solicitada, que consiste en *"que cantidad de vehículos blindados y escoltas, se han venido asignando a cada una de las autoridades en cita."*, toda vez que la revelación de esa información comprometería la seguridad pública, tomando en consideración que la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, es la Dependencia encargada de mantener el orden y la seguridad pública en esta Entidad Federativa, por lo que las estrategias operativas que despliega en cumplimiento a sus atribuciones legales, se verían gravemente afectadas, más aún porque el solicitante pretende saber la cantidad de vehículos y "escoltas" que se han venido asignando al Gobernador, Fiscal, Fiscal Regional, Coordinador de Seguridad Pública y Secretario de Seguridad, datos estos que de hacerse públicos, pudieran llegar al conocimiento de personas que en un momento dado pudieran fraguar un plan para agredirlos o causarles daño; igualmente se pondría en riesgo la vida, seguridad y salud de esos funcionarios, porque la revelación de la información permitiría compararla y confrontarla con otros datos, y a través de deducciones arribar a otros datos, que posibilitarían elaborar planes delictivos con mayor precisión; de la misma forma, revelar esa información obstruiría gravemente la prevención de delitos, en razón de que de llegar a

personas que pudieran tener la intención de cometer conductas delictivas para causar daño a uno o varios de los funcionarios que señala el solicitante, les facilitaría la elaboración y ejecución de planes delictivos, en perjuicio de la seguridad pública y de la seguridad, integridad física y vida de esas personas; bajo ese contexto, el riesgo de perjuicio que supone la divulgación de la información solicitada, supera el interés general de que sea difundida públicamente, pues expondría aspectos y detalles específicos y estratégicos de seguridad, ya que por su naturaleza, el despliegue y configuración (integrados entre otros aspectos por la cantidad de vehículos y personal asignados) de los esquemas de seguridad que despliega la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, en cumplimiento a las atribuciones que le confiera la Ley del Servicio de Protección para el Estado de Jalisco y sus Municipios, y su Reglamento, requieren el mayor sigilo para la consecución del éxito, y precisamente por esa razón, el citado ordenamiento reglamentario, establece que toda la información y datos que esa Secretaría resguarda, tienen el carácter de reservados y confidenciales; por lo anterior, la reserva es proporcional y resulta el medio menos restrictivo posible para evitar el perjuicio al interés público, pues se clasifica como reservada esa parte de la solicitud. Por lo anterior, se considera que la información solicitada debe clasificarse como reservada, porque su divulgación representaría un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público y la seguridad estatal, en razón de que implicaría además la violación al contenido de disposiciones de orden público como lo son la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; la Ley del Servicio de Protección para el Estado de Jalisco y sus Municipios, y su Reglamento, que señalan que información como la que requirió el solicitante, tiene el carácter de reservada, y al divulgarla o hacerla pública, se transgredirían igualmente, disposiciones establecidas en los Lineamientos Generales de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia, que resultan aplicables a este asunto en particular en términos del artículo 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en razón de que revelar la información solicitada, comprometería la seguridad pública, al poner en peligro las funciones que despliega la Secretaría de Seguridad, tendientes a preservar y resguardar la vida, salud e integridad de personas, así como el ejercicio de sus derechos, porque los servicios que despliega esa Secretaría, obedecen a una estrategia previamente establecida, cuyo éxito depende en gran proporción del sigilo con que se maneje la información sensible que constituye esa estrategia, por lo que revelar datos como la cantidad de vehículos y elementos desplegados en relación a determinados funcionarios públicos, indudablemente acarrearía poner en peligro el éxito de esos despliegues operativos; tal situación a la vez generaría una vulneración a las estrategias institucionales implementadas para mantener el orden público, ya que este precisamente, se vería en riesgo ante un evento en el que se pretendiera agredir o atacar a cualquiera de los funcionarios que el solicitante menciona, y el ataque o agresión a cualquiera de ellos, evidentemente afectaría el mantenimiento del orden público; el daño en este caso particular, se generaría también al revelar la información solicitada, porque se harían públicos datos que pudieran ser aprovechados para conocer la capacidad de reacción que tienen determinados esquemas de seguridad, en este caso los que pudieran estar desplegados para proteger a esos funcionarios públicos, siendo que esos datos forman parte de la información, planes y estrategias que la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco despliega en cumplimiento a sus atribuciones legales; aunado a lo anterior, debe tomarse en consideración que la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, es la encargada de la seguridad pública a su vez, es parte integral del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, por lo que dicha Secretaría tiene a su cargo funciones tendientes a preservar y resguardar la vida, salud y el ejercicio de los derechos de determinadas personas, en este caso, aquellos que se encuentran sujetos a las disposiciones que establece la normativa que regula sus funciones, por lo que sus estrategias y esquemas operativos forman parte también de la seguridad pública; asimismo, dar a dar a conocer

públicamente la información solicitada, revelaría datos que pudieran ser aprovechados para conocer la capacidad de reacción de las instituciones encargadas de la seguridad pública, tomando en consideración que el solicitante pretende saber la cantidad de vehículos y elementos asignados en relación a funcionarios públicos específicos, lo cual evidentemente implicaría la revelación de datos que pudiera ser aprovechados para conocer la capacidad de reacción de esa Secretaría, debido a que se tendría noción de manera directa sobre sus estrategias operativas y otros datos concernientes a su operación, lo cual pondría en riesgo la vida, seguridad e integridad de personas y/o individuos; por tal motivo y dada la naturaleza de la información a la cual se pretende tener acceso, debe considerarse que los servicios de protección prestados en términos de la Ley del Servicio de Protección para el Estado de Jalisco y sus Municipios, y su Reglamento, deben de realizarse con el mayor sigilo y discreción posible, a fin de garantizar al máximo la eficaz ejecución de las medidas de protección y seguridad que se implementan; y si personas no autorizadas tienen acceso a dicha información, se facilitaría que grupos delincuenciales lleven a cabo actos ilícitos, poniéndose así, en inminente peligro la vida o integridad física de las personas receptoras del servicio y del personal asignado a su seguridad, pues se identificaría cuál es su capacidad operativa, y esto permitiría hacer estudios de oportunidad para materializar conductas delictivas en su agravio, lo que podría implicar incluso la pérdida de vidas humanas, que es el más alto valor humano. Además, debe enfatizarse que la Secretaría de Seguridad del Estado, con base en el artículo 4 de la Ley del Servicio de Protección para el Estado de Jalisco y sus Municipios, tiene el deber de instrumentar todo tipo de medidas para garantizar los derechos de las personas que son susceptibles de recibir protección en los términos de la Ley del Servicio de Protección para el Estado de Jalisco y sus Municipios, y su Reglamento, por lo que resulta evidente que un mecanismo eficaz para cumplir esa obligación legal, es la de resguardar aquella información sensible que pudiera poner en riesgo los esquemas de protección, por las circunstancias especiales y excepcionales que tienen ese tipo de servicios, en los que la información interna de carácter táctica o estratégica, cobra una especial relevancia, ya sea que tenga el carácter de cuantitativa o cualitativa, porque el divulgarla facilitaría la maquinación o elaboración de planes delictivos que tengan como objetivo mermar la seguridad, o atacar la integridad o la vida tanto de las personas susceptibles de protección como la de aquellas que forman parte del aparato de protección correspondiente, por lo que se insiste que el interés individual del solicitante no puede estar por encima de un valor fundamental como lo es la vida, o la seguridad de las personas que reciben, un servicio de protección, o aquellas que les brindan seguridad, no debiendo pasar inadvertido el hecho de que al expedirse la Ley del Servicio de Protección para el Estado de Jalisco y sus Municipios, y su Reglamento, se tomaron en consideración esas cuestiones, señalando de manera específica que todos los datos y la información relacionada con los servicios brindados con base en esos ordenamientos, tienen el carácter de reservados y confidenciales.

DAÑO PRESENTE.- El otorgar la información solicitada, en el presente, traería como consecuencia la violación a disposiciones de orden público como lo son, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia, la Ley del Servicio de Protección para el Estado de Jalisco y sus Municipios, y su Reglamento, así como la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; generando además la posibilidad de que grupos transgresores de la Ley estuvieran en posibilidad de planear con información certera un atentado en contra de los funcionarios públicos sobre los cuales se solicita información, es decir, la divulgación de esa información sería de gran utilidad para que grupos de la delincuencia organizada, puedan planear y ejecutar dinámicas delictivas que pudieran poner en riesgo la seguridad, integridad y vida de esas personas; por otro lado se estaría revelando información relativa a la capacidad operativa de la Secretaría de Seguridad

del Estado de Jalisco (concretamente el número de vehículos y elementos asignados en relación a funcionarios públicos específicos), lo que pondría incluso generar un daño colateral a la población en general que pudiera estar presente al momento de un ataque o atentado perpetrado en contra de esas personas, pues no se puede perder de vista que las dinámicas delictivas utilizadas por grupos de delincuencia organizada, en últimas fechas no están dirigidas única y exclusivamente a autoridades del ámbito de la seguridad pública, procuración y administración de justicia, ya que cualquier persona puede resultar herida o afectada en caso de una agresión. Ahora bien, se reitera que el interés particular de una persona, como lo es el solicitante de información, no puede estar por encima del interés colectivo que tiene la ciudadanía que está interesada en que se preserve la seguridad en el Estado, la vida e integridad de los funcionarios que despliegan sus actividades en el ámbito estatal en esta Entidad Federativa; siendo menester mencionar que la Secretaría de Seguridad, entre sus obligaciones tiene la de garantizar y otorgar servicios de protección a determinadas personas, cuando se reúnan los requisitos correspondientes, cuya eficacia podría verse en riesgo, de suministrarse datos que permitan saber cuál es su capacidad operativa, en razón de que la citada Secretaría es una Dependencia estratégica y sensible, regulada entre otras, por la Ley del Servicio de Protección Estatal y su Reglamento, que establecen con toda claridad que todos los aspectos de ese tipo de servicios, tienen el carácter de reservados y confidenciales.

DAÑO ESPECÍFICO.- Resulta del hecho que al divulgar la información solicitada, se estaría infringiendo la normativa que le es aplicable a la Secretaría de Seguridad como sujeto obligado, en especial la concerniente a la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, que debe dar trato reservado y confidencial, a todos los datos relacionados con los servicios que presta con sujeción a la Ley del Servicio de Protección para el Estado de Jalisco y sus Municipios, y su Reglamento, no descartándose que pudiera actualizarse una responsabilidad administrativa y hasta penal, en razón de que existen diversos dispositivos legales que obligan a manejar ese tipo de información bajo los principios de reserva y confidencialidad, por consecuencia los sujetos obligados se encuentran imposibilitados para hacer públicos datos que pudiesen poner en riesgo la vida, la seguridad, la salud y hasta el patrimonio de las personas que pudieran ser receptoras del servicio, pues se estaría entregando información sustancial que en un momento dado pudiera ser utilizada por algún sujeto transgresor de la ley, que conocería datos que le permitirían saber con certeza cuál es la capacidad operativa de la referida Secretaría, y esa información en consecuencia, podría ser objeto de un estudio de oportunidad para materializar un atentado. En ese contexto el daño específico surge en razón de que la Secretaría de Seguridad se encuentra obligada a acatar aquellas disposiciones legales que protegen la información que tiene el carácter de reservada o confidencial, e incluso la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, debe instrumentar todo tipo de medidas a efecto de garantizar los derechos de las personas que pueden ser susceptibles de recibir protección, y entre esos derechos precisamente se encuentra su vida, seguridad e integridad física.

Una vez que se expresó la prueba de daño correspondiente, atendiendo a la literalidad de la petición de información, se sugiere se realice la búsqueda de la información en lo concerniente a "vehículos blindados", en el Área competente que acorde a sus facultades y atribuciones pudiera poseer o resguardar dicha información.

Como colofón a los argumentos anteriores, solicito se ponderen los eventos que se han suscitado y que han vulnerado parcialmente la paz en el Estado, y que es reflejo de la actitud que tienen los grupos transgresores de la Ley, quienes han diversificado sus acciones ilícitas, no solo en Jalisco sino en todo el País, lo cual obliga a las instituciones gubernamentales de los tres niveles de gobierno, a redoblar sus esfuerzos para lograr obtener seguridad pública en los

Municipios en la Entidad y en todo el territorio nacional, lo cual se vería mermado si se revelaran datos que por su propia naturaleza y por disposición legal deben mantenerse como reservados.


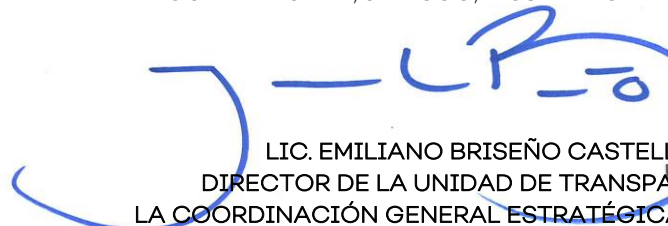
De la misma forma, resulta importante reiterar la competencia parcial que se hiciera llegar a la Unidad de Transparencia de la Fiscalía del Estado y al Consejo de la Judicatura, acompañada del oficio CGEGT/UT/7387/2024, de fecha 22 veintidós de Octubre del año en curso, a efecto de que atendiendo sus atribuciones y facultades puedan otorgar una respuesta respecto de la información que resulte de su competencia atender.

Por las manifestaciones anteriores, y asegurando al Ciudadano haber realizado las gestiones pertinentes y exhaustivas para el debido tratamiento de su solicitud de información, se tiene por cumplimentada y respondida su solicitud de información pública en términos de lo establecido en el numeral 86 punto 1 fracción II de la vigente Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco resultando aplicable el Criterio de Interpretación emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales que a la letra indica lo siguiente:

Congruencia y exhaustividad. Sus alcances para garantizar el derecho de acceso a la información. De conformidad con el artículo 3 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, de aplicación supletoria a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en términos de su artículo 7; todo acto administrativo debe cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad. Para el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información, la congruencia implica que exista concordancia entre el requerimiento formulado por el particular y la respuesta proporcionada por el sujeto obligado; mientras que la exhaustividad significa que dicha respuesta se refiera expresamente a cada uno de los puntos solicitados. Por lo anterior, los sujetos obligados cumplirán con los principios de congruencia y exhaustividad, cuando las respuestas que emitan guarden una relación lógica con lo solicitado y atiendan de manera puntual y expresa, cada uno de los contenidos de información.

ATENTAMENTE

2024 AÑO DEL BICENTENARIO DEL NACIMIENTO DEL FEDERALISMO MEXICANO,
ASÍ COMO DE LA LIBERTAD Y LA SOBERANÍA DE LOS ESTADOS
GUADALAJARA, JALISCO; A 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024



LIC. EMILIANO BRISEÑO CASTELLANOS
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA, DE
LA COORDINACIÓN GENERAL ESTRATÉGICA DE SEGURIDAD.

Unidad de Transparencia: Avenida 16 de Septiembre No. 400, esquina Libertad, colonia Centro, Guadalajara, Jalisco. Horario de atención: lunes a viernes de 09:00 a 15:00 horas. Número telefónico 01 (33) 3668-7900 EXT 18294 Y 18046
AALR/JL